



## Validación Jurídica Solicitud de Servicio

### Datos de la solicitud

<b>Entidad Solicitante</b>	<b>Alcaldía Municipal de Pereira</b>
<b>Nombre de la Solicitud</b>	<b>Base de Datos Estratificación</b>
<b>Objetivo de la Solicitud</b>	Estandarizar bajo los lineamientos del dominio semántico del Marco de Interoperabilidad, los elementos de dato que hacen parte de la base de datos de estratificación de la Alcaldía Municipal de Pereira.
<b>Norma que acredita a la entidad como pública</b>	Ordenanza 012 del 6 de diciembre de 1972.

### ELEMENTOS DE DATO.

<b>Identificación Preliminar de los Elementos de Dato</b>
<b>Los elementos de dato involucrados en el proceso de estandarización se relacionan en el catálogo de elementos de dato.</b>

### VALIDACIÓN JURÍDICA. (Análisis de Antecedentes y Normatividad Aplicable)

El presente documento tiene como finalidad realizar la validación jurídica de la solicitud de servicio presentada por la **Alcaldía Municipal de Pereira** en la cual, la entidad de conformidad con su solicitud busca estandarizar bajo los lineamientos del dominio semántico del Marco de Interoperabilidad, los elementos de dato que hacen parte de la base de datos de estratificación”.

Frente a los mecanismos de intercambio de información utilizados por las entidades del estado, el Decreto 1008 de 2018, determina la interoperabilidad como habilitador transversal de la Política de Gobierno Digital, es por ello, que con el objetivo de fortalecer el intercambio de información entre entidades y sectores, se ha establecido el uso del Estándar de Lenguaje Común de Intercambio de Información, con el fin de facilitar el entendimiento de los involucrados en los procesos de intercambio, el cual puede ser utilizado para proveer y/o consumir servicios de intercambio de información, definir estructuras para el almacenamiento de la información y estructurar formularios para la obtención de información.

El estándar tiene como fundamento jurídico, normas de carácter Constitucional, Legal y Reglamentarias, como lo son los artículos 113 y 229 de la Constitución Política, que determinan la obligación de las entidades públicas de colaborar armónicamente para el ejercicio de sus funciones, y el artículo 6 de la Ley 489 de 1998, que instituye el principio de coordinación y colaboración entre entidades del Estado.

Con la expedición de las normas denominadas anti-trámites, que tienen como objetivo fundamental la racionalización y simplificación de los trámites y procedimientos administrativos que deben adelantar los ciudadanos ante las entidades de la administración pública, se permite el intercambio de información entre distintas entidades oficiales en aplicación del principio de colaboración. (Artículo 14, Ley 962 de 2005).



## Validación Jurídica Solicitud de Servicio

Posteriormente con la expedición del Decreto 235 de 2010, modificado por el Decreto 2280 de 2010, se regula el intercambio de información para el cumplimiento de funciones públicas, estableciendo que las entidades deberán determinar los mecanismos tecnológicos para realizar el intercambio, así como los mecanismos legales para formalizar el mismo.

Así mismo la ley 1712 de 2014, reglamentada por el decreto 103 de 2015 y corregida por el Decreto Nacional 1494 de 2015 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, determina en su artículo 11, la obligatoriedad de las entidades públicas de hacer público todo mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado.

De igual manera por estar cobijado en el ámbito de aplicación del Decreto 2573 de 2014, artículo 2, como sujeto obligado a cumplir las disposiciones contenidas en este decreto, esto por estar enunciada en los términos del artículo 39 de la Ley 489 de 1998, y lo establecido en el Decreto 1078 de 2016, en especial lo contenido en el artículo 2.2.9.1.1.4. Principios y fundamentos de la Política de Gobierno Digital y Artículo 2.2.13.1.1, Información pública obligatoria.

Es así como con las finalidades que pretenden alcanzarse conforme al artículo 74 de la Carta, son los funcionarios públicos y los particulares que ejerzan funciones públicas o presten servicios públicos o cumplan determinadas funciones públicas, quienes deben permitir el acceso a los documentos o información pública que requieran los titulares de este derecho, a fin de que ejerzan su labor de fiscalización y control del poder público, participen democráticamente, y ejerzan sus derechos políticos.

En cuanto a los elementos de dato, la entidad deberá tener en cuenta que, pese a la estandarización, es necesario que examine frente a su publicación que no se encuentran dentro de aquellos que el legislador ha determinado como reservados, conforme lo señala el artículo 24 de la ley 1437 de 2011, los cuales se relaciona a continuación:

- a.** Los protegidos por el secreto comercial o industrial.
- b.** Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales.
- c.** Los amparados por el secreto profesional.
- d.** Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica, salvo que sean solicitados por los propios interesados o por sus apoderados con facultad expresa para acceder a esa información.
- e.** Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la Nación, así como a los estudios técnicos de valoración de los activos de la Nación. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación.

Ahora, con la expedición de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”, se señalan como datos sensibles aquellos que afecten la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como:



## Validación Jurídica Solicitud de Servicio

- Origen racial o étnico
- La orientación política
- Las convicciones religiosas o filosóficas
- La pertenencia a sindicatos
- La pertenencia a organizaciones sociales de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición.
- Los datos relativos a la salud
- A la vida sexual
- Los datos biométricos

Es así como por parte de la entidad solicitante, se debe verificar que efectivamente la información y datos que pretenda intercambiar, cumplan con todos los parámetros establecidos en la normatividad aplicable en cuanto al mencionado intercambio de datos, esto con el fin que no se transgreda normatividad vigente.

El Estado de derecho se funda, entre otros principios, en el de la publicidad, el cual supone el conocimiento de los actos de los órganos y autoridades estatales, en consecuencia, implica para ellos desplegar una actividad efectiva para alcanzar dicho propósito; dado que, la certeza y seguridad jurídicas exigen que las personas puedan conocer, no sólo de la existencia y vigencia de los mandatos dictados por dichos órganos y autoridades estatales, sino, en especial, del contenido de las decisiones por ellos adoptadas, para lo cual, la publicación se instituye en presupuesto básico de su vigencia y oponibilidad, mediante los instrumentos creados con tal fin.

De igual manera, debe verificarse por parte de la entidad que el intercambio de estos datos e información, contengan los antecedentes de cómo fueron adquiridos y permitan ser soportados en con estos antecedentes, para dar mayor seguridad a quien los consulte.

Ahora, la solicitud elevada por la entidad corresponde a información que ésta manifiesta administrar en el marco de su competencia. En consecuencia, es la llamada a definir los elementos de dato, así como la competencia para el suministro o solicitud de información, teniendo en cuenta siempre que se respeten los derechos constitucionales de Habeas Data, Derecho al buen nombre, Derecho a la honra, Derecho a la intimidad y Derecho a la información, en especial frente a los datos sensibles de que trata la Ley Estatutaria 1581 de 2012, lo cual en algunos casos implicaría una limitación a su publicación e intercambio.

### CONCLUSIONES.

Del cotejo entre los elementos de datos y las normas citadas, se observa que la entidad cumple con la normatividad vigente para la validez jurídica de la solicitud de servicio, esto por las razones antes establecidas, por lo anterior, la solicitud de servicio presentada por la **Alcaldía Municipal de Pereira** es válida jurídicamente, de acuerdo con el análisis realizado.